

DICIEMBRE 19 DE 1934

68ª REUNION — 10ª SESION EXTRAORDINARIA

PRESIDENCIA DE LOS DOCTORES ANTENOR R. FERREIRA
Y RODOLFO COROMINAS SEGURA

MINISTRO PRESENTE: de Hacienda, doctor Federico Pinedo; DIPUTADOS PRESENTES: Acosta Guillermo, Agüero Santos, Aguirrezabala Miguel A., Ahumada Luis Alberto, Alonso Alfredo J., Ameri Rogelio L., Amoedo Aurelio F., Andreis Fernando de, Aráoz Ernesto M., Aráoz José Ignacio, Arce José, Arnoldi Adolfo, Basualdo Honorio, Benegas Tiburcio, Bermúdez Manuel A., Bosasso Manuel V., Biancofiore Rafael, Bogliolo Rómulo, Bonazzola Carlos F., Bosano Ansaldo Daniel, Briuolo Miguel, Bruchou Eduardo, Buira Demetrio, Buitrago Pedro, Bustillo José M., Buyán Marcelino, Cáceres Lorenzo, Cafferata Juan F., Candia Cornelio, Cárcano Miguel Angel, Carreras Ernesto L., de las, Castiñeiras Alejandro, Castro Felipe, Coca Joaquín, Contte José A., Cordero Octavio, Corominas Segura Rodolfo, Costa Méndez Nicanor, Courrel Carlos D., Degano Alfredo P., Della Latta Jerónimo, De Miguel Benito, Diekmann Adolfo, Diekmann Enrique, Escalera Facundo, Escobar Adrián O., Fernández Damián, Ferreira Antenor R., García Gorostiaga Raúl, Ghioldi Américo, Giménez Angel M., Godfrid Juan, Godoy Raúl, González Benjamín S., González Guerrico Manuel, González Masada Manuel, González Valentín, Grisolia Luis, Groppo Pedro, Guaglianelli Aquiles M., Herrera Bruno J., Inda Rufino, Iribarne Alberto, Iriondo Urbano de, Korn Guillermo, Lamosa Juan B., López Héctor S., Magris Amleto, Marcó Cipriano F., Martínez José Heriberto, Molina Serapio, Moret Carlos (h.), Morrough Bernard Juan F., Mouchet Enrique, Movsi-choff Bernardo, Noble Julio A., Padilla Tiburcio, Palacín Manuel, Palacín Pedro, Palmeiro José, Pena José Luis, Pérez Leirós Francisco, Pfeleger José E., Pintos Angel, Pita Carlos A., Pressacco Juan P., Pueyrredon Carlos A., Radío Pedro, Ramiconi Luis, Ramírez Manuel (h.), Repetto Nicolás, Rodríguez Alfredo, Rozas José E., Ruggieri Silvio L., Ruiz Oscar, Salcedo Saturnino, Schoo Lastra Dionisio, Sellarés Avelino, Solari Felipe C., Solari Juan Antonio, Solís Rogelio J., Speroni Daniel O., Spinetto Alfredo L., Taboada Mora Cipriano, Uriburu Francisco, Vega Abraham de la, Vidal Baigorri José, Vionnet Rodolfo L., Zorda Justiniano de la; AUSENTES, CON LICENCIA: Amadeo y Videla Daniel, Aráoz Eudoro D., Becerra Eugenio A. (h.), Critto Miguel, Fresco Manuel A., Lencinas Rafael Néstor, Ocampo Enrique, Parera Gregorio, Repetto Agustín, Rojas Marcos E., Simón Padrós Juan, Vallejo Luis A.; CON AVISO: Ganza Marcelino, Garayalde José María, Noble Roberto J., Oddone Jacinto, Palacio Benjamín, Parodi Misael J., Pomponio Vicente E., Vicchi Adolfo A., Videla Rodolfo G.; SIN AVISO: Arrieta Herminio, Bunge Augusto, Calderón Osvaldo M., Carreras José, Carús Agustín J., Dávila Miguel V., Espil Alberto, Gómez Rincón Abel, Graffigna Santiago, Jardel Enrique C., Lima Vicente Solano, Manacorda Carlos, Mancini Rafael, Mattos Luis María, Mouesca Eduardo, Quiroga Félix, Ruiz Guiffazá Jacinto, Salas José Raquel, Santillán Enrique, Saravia José M., Videla Dorna Daniel, Vignart Uberto F., Wade Eugenio, Zarazaga Marcial J.

SUMARIO

- 1.—Manifestaciones en minoría.
- 2.—Acta.
- 3.—Asuntos entrados:

I.—Mensaje del Poder Ejecutivo incluyendo en el decreto de convocatoria a sesiones extraordinarias el proyecto de ley sobre envío de equipos de tiradores al Concurso Internacional de Tiro.

II.—Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo abriendo un crédito suplementario al Ministerio de Guerra para gastos de

mantenimiento de la neutralidad argentina en el conflicto boliviano-paraguayo.

III.—Comunicaciones oficiales.

IV.—Peticiones particulares.

V.—Proyecto de ley del señor diputado Rodríguez creando una escuela de artes y oficios en San Fernando (Buenos Aires).

4.—Acuérdase licencia para faltar a sesiones a los señores diputados Amadeo y Videla, Vallejo, Parera, Repetto (A.), Simón Padrós, Ocampo y Aráoz (Eudoro D.).

5.—Termina la consideración del despacho de la Comisión de Presupuesto y Ha-

cienda en el proyecto de ley, en revisión, aprobando la conversión de las cédulas del Banco Hipotecario Nacional.

- 6.—Se considera y aprueba el despacho de la Comisión de Presupuesto y Hacienda en el mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo eximiendo del pago del impuesto a las transacciones a los comerciantes minoristas.
- 7.—Se considera y aprueba el despacho de la Comisión de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de ley sobre tasa adicional a los dividendos de acciones de sociedades anónimas.
- 8.—Se considera y aprueba el despacho de la Comisión de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de ley sobre modificaciones a la ley 11.683, sobre procedimiento para el cobro de impuestos.
- 9.—Moción del señor diputado Martínez para considerar de inmediato el despacho de la Comisión de Presupuesto y Hacienda sobre prórroga del impuesto a los réditos. Es aprobada.
- 10.—Se considera y aprueba el despacho a que se refiere el número anterior.
- 11.—A indicación del señor diputado Martínez, se aplaza la consideración del despacho de la Comisión de Presupuesto y Hacienda sobre modificaciones a las tasas de impuestos internos.
- 12.—Se considera el despacho de la Comisión de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de ley sobre impuesto a las ventas.

—En Buenos Aires, a diecinueve de Diciembre de 1934, siendo la hora 15 y 26 minutos:

1

MANIFESTACIONES EN MINORIA

Sr. Corominas Segura. — Pido la palabra.

Entiendo que no hay quórum todavía en el recinto ni en la casa. Hago indicación para que se continúe esperando 20 minutos.

—Asentimiento.

Sr. Presidente (Ferreira). — Como hay asentimiento, así se hará.

—A la hora 15 y 40:

2

ACTA

Sr. Presidente (Ferreira). — Queda abierta la sesión con la presencia de 80 señores diputados.

Se va a dar lectura del acta de la sesión anterior.

—Por indicación del señor diputado Courel, se suprime la lectura del acta y se da por aprobada.

3

ASUNTOS ENTRADOS

Sr. Presidente (Ferreira). — Se va a dar cuenta de los asuntos entrados.

I

Buenos Aires, 12 Diciembre de 1934.

Al Honorable Congreso de la Nación.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2º del decreto de 1º de Octubre próximo pasado, de convocatoria al Honorable Congreso a sesiones extraordinarias, tengo el honor de dirigirme a vuestra honorabilidad, incluyendo entre los asuntos a tratarse, el proyecto de ley autorizando al Poder Ejecutivo a invertir la suma de \$ 40.000 para enviar un equipo de tiradores de fusil y otro de revolver al Concurso Internacional de Tiro, que se realizará en Roma el año próximo. El citado proyecto de ley fué remitido a vuestra honorabilidad con mensaje número 77 de fecha 13 de Septiembre próximo pasado.

Dios guarde a vuestra honorabilidad.

AGUSTÍN P. JUSTO.

Federico Pinedo.—Manuel A. Rodríguez.

—Al archivo.

asunto número 1 de la orden del día número 138 es el señor diputado Arrieta, que no está presente, propongo se pase al asunto siguiente, que es el impuesto a las ventas.

Sr. Presidente (Ferreira).—En consideración la moción de postergación, del señor diputado por Córdoba.

—Se vota y resulta afirmativa.

12

IMPUESTO A LAS VENTAS

Orden del día número 138

Núm. 2

Honorable Cámara:

Vuestra Comisión de Presupuesto y Hacienda ha tomado en consideración el menaje y proyecto de ley remitido por el Poder Ejecutivo sobre «Impuesto a las ventas de mercaderías, frutos y productos, realizadas en todo el territorio de la Nación»; y, por las razones que dará el miembro informante, aconseja la sanción del siguiente:

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

Artículo 1º — Establécese un impuesto que se aplicará sobre las ventas de mercaderías, frutos y productos, realizadas en todo el territorio de la Nación Argentina, en forma que incida sobre una sola de las etapas de que es objeto la negociación de cada mercadería.

Art. 2º — El gravamen se aplicará sobre el precio neto de venta que resulte de la factura o documento equivalente, extendido por las personas obligadas a ingresar el impuesto.

Art. 3º — Se entiende por precio neto de las ventas de mercaderías el que resulte una vez deducidas las bonificaciones y descuentos hechos al comprador por épocas de pago u otro concepto similar, de acuerdo con las costumbres de plaza y siempre que dichas bonificaciones y descuentos se efectúen sobre ventas sujetas al impuesto, se contabilicen y

facturen. Puede deducirse también del total de la venta el importe correspondiente a mercaderías y envases devueltos por el comprador.

Art. 4º — A los efectos de la aplicación de este impuesto, cuando las facturas o documentos no expresen el valor normal de plaza, la dirección podrá estimarlo de oficio, de conformidad con lo dispuesto por la ley 11.683.

Art. 5º — Son responsables directos del ingreso del impuesto:

- a) Los productores e industriales nacionales, por el impuesto correspondiente a la venta de mercaderías de su producción o manufactura;
- b) Los importadores, por el impuesto correspondiente a las ventas de mercaderías importadas por cuenta propia o de terceros;
- c) Los exportadores, por el impuesto correspondiente a las mercaderías que salen del país por cuenta propia o de terceros.

Art. 6º — Cuando los importadores introduzcan al país mercaderías por cuenta de terceros, serán responsables del ingreso del impuesto desde el momento en que las mercaderías son retiradas de los depósitos de aduana. En estos casos y sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 9º de la ley 11.683, el impuesto se calculará sobre el valor, incluidos derechos y gastos facturados por el importador.

Art. 7º — Para determinar el monto del impuesto a pagar sobre las ventas en el mercado interno, se practicará una liquidación sobre la base del total de las ventas, efectuándose las siguientes deducciones:

- a) El importe de las bonificaciones, descuentos y devoluciones a que se refiere el artículo 3º;
- b) El importe de las ventas de mercaderías eximidas por la presente ley;
- c) El importe de las compras de mercaderías gravadas con el impuesto de esta ley, adquiridas en el mercado interno o importadas en las condiciones del artículo 6º para ser elaboradas y transformadas, agregadas o utilizadas para producir o industrializar mercaderías para la venta;

- d) El importe de las compras de mercaderías gravadas, adquiridas en el mercado interno o importadas en las condiciones del artículo 6º para ser revendidas en el mismo estado en que se compran. En estos casos se sumará al precio de compra un coeficiente de aumento que fijará la Dirección;
- e) El importe de los impuestos internos nacionales y provinciales abonados.

Art. 8º — El impuesto es adeudado desde el momento de la entrega de la mercadería o acto equivalente y se percibirá sobre la base de la declaración jurada, en la forma y plazos que fijará la Dirección.

Cuando la mercadería es exportada en consignación, el impuesto es adeudado desde el momento del embarque y será liquidado en la forma que reglamentará el Poder Ejecutivo.

Art. 9º — Quedan eximidas del impuesto:

- a) Las ventas en el mercado interno de las siguientes mercaderías de producción nacional: ganados, aves y huevos; carne fresca; frutos del país; leña, carbón vegetal, carbonilla y tierra de carbón vegetal; tabacos, cigarros y cigarrillos; cereales y oleaginosas; hortalizas, legumbres y frutas frescas; semillas y bulbos; harinas de trigo y de maíz; afrecho y afrechillo; pan, galleta común y productos similares de panadería; azúcar de caña y de remolacha; vinos genuinos; cerveza genuina elaborada con malta nacional y lúpulo; alcohol desnaturalizado para combustible; productos frescos de la pesca; leche fresca o pasteurizada, crema, mantequilla y queso; productos de granja elaborados dentro de un régimen de trabajo familiar y, en general, los productos de la ganadería y de la agricultura en tanto no hayan sufrido elaboración o tratamientos no indispensables para su conservación en estado natural o acondicionamiento;
- b) Las ventas de carbón mineral nacional o importado;
- c) Las ventas efectuadas a las cooperativas de consumo y las de las cooperativas de producción, constituidas de acuerdo a la ley número 11.368 e inscriptas como tales en el Ministerio de Agricultura;

- d) Las ventas efectuadas por entidades de beneficio público que no persiguen fines lucrativos, reconocidas como tales por la Dirección;
- e) La venta de diarios, periódicos y revistas nacionales y extranjeras;
- f) Las ventas de acciones, títulos, divisas, valores, estampillas y billetes de lotería;
- g) El suministro de servicios públicos que sean materia de concesión oficial y cuyas tarifas estén aprobadas por los Estados nacional o provinciales o por las municipalidades;
- h) Las ventas de los pequeños productores y artesanos, en la forma que reglamentará el Poder Ejecutivo.

Art. 10. — Fijase el impuesto establecido en el artículo 1º, en el 3 o/oo sobre los productos o mercaderías vendidas o remitidas en consignación al exterior y en el 2 % para las ventas del mercado interno.

Art. 11. — Dentro de los treinta días de la promulgación de la presente ley o antes de la iniciación de un negocio o industria cuyas ventas estén sujetas a este impuesto, los responsables por el pago del impuesto estarán obligados a solicitar su inscripción en la Dirección General.

La inscripción podrá ser obligatoria para los revendedores, consignatarios, corredores, etcétera, los que quedarán sujetos a todas las obligaciones que establece la presente ley.

Art. 12. — La presente ley entrará en vigor el 1º de Enero de 1935. A partir de esa fecha, cuando las leyes mencionen la Dirección General de los Impuestos a los Réditos y, a las Transacciones, se entenderá la Dirección General del Impuesto a los Réditos, a cuyo cargo estará la percepción del impuesto de esta ley.

En tanto no se opongan a la presente, le son aplicables todas las disposiciones relativas al impuesto regido por la ley 11.680, contenidas en la ley 11.683.

Art. 13. — Los responsables enumerados en el artículo 5º abonarán solamente el impuesto del 3 o/oo sobre las ventas que hayan efectuado antes del día 9 de Noviembre de 1934 mediante contrato extendido en documento público o privado, en el que conste el precio convenido y siempre que la entrega o factura de las mercaderías se realice en el primer semestre de 1935. Los responsables que tengan pendiente el cumplimiento de tales contratos

deberán presentar dentro de los quince días de promulgada la ley una declaración jurada en la que detallarán el número de los mismos y el importe de las mercaderías a entregar durante dicho semestre.

Art. 14. — El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley, de acuerdo a lo establecido en el artículo 2º de la ley 11.683.

Art. 15. — Comuníquese, etc.

Sala de la comisión, 27 de Noviembre de 1934.

Pedro Groppo. — Luis Alberto Ahumada. — Herminio Arrieta. — Alfredo J. Alonso. — José M. Bustillo. — Héctor S. López. — Raúl Godoy. — Juan Simón Padrós. — Abraham de la Vega. — Eduardo Bruchou.

En disidencia total:

Adolfo Dickmann. — José Luis Pena. — Manuel V. Besasso. — Rómulo Bogliolo. — Julio A. Noble. — Américo Ghioldi.

Buenos Aires, Septiembre 28 de 1934.

Al Honorable Congreso de la Nación.

Tengo el honor de remitir a consideración de vuestra honorabilidad el adjunto proyecto de ley sobre creación de un impuesto a las ventas.

El Poder Ejecutivo ha propuesto la prórroga del impuesto a las transacciones para el año 1935, pero desistiría de ese propósito si vuestra honorabilidad convirtiera en ley este proyecto, pues su rendimiento cubriría la cantidad de 18.000.000 en que aquel está valorado en el cálculo de recursos.

El impuesto que se propone constituye un gravamen a la primer venta de que es objeto una mercadería fabricada en el país o importada del extranjero. No tiene por lo tanto ninguna semejanza con el de las transacciones.

Las normas generales dentro de las cuales se encuadra, son las siguientes:

1º Circunscribir su alcance a la sola venta de mercaderías, frutos y productos, quedando por tanto al margen de él todas las demás transacciones comerciales;

2º Aplicarlo sobre el precio neto de la venta;

3º Percibirlo en una sola de las etapas de comercialización de que es susceptible cada mercadería según el estado en que se venda, debiendo abonarlo los productores, industriales, importadores y exportadores;

4º Reducir al mínimo posible el número de responsables de su ingreso por eliminación de los comerciantes minoristas, intermediarios y mayoristas, en cuanto actúan como revendedores solamente;

5º Simplificar su liquidación y evitar al contribuyente formalidades especiales de contabilidad.

Para las mercaderías exportadas se propone una tasa del 3 o/oo y se fija como tasa general el 1 ½ % que es indudablemente liviana, si se considera que el impuesto se percibirá sobre la venta en que la mercadería tiene su menor precio y no se repetirá en las operaciones sucesivas. Otro factor que impide adoptar una tasa inferior es el carácter amplísimo de las exenciones, las que, además de abarcar los productos de nuestras industrias madres, se han extendido a los productos de diversas industrias transformadoras como la del azúcar, la del vino y la del tabaco, en atención a la situación económica porque atraviesan y al hecho de que los impuestos internos nacionales o provinciales con que están gravadas han llegado a un límite que prudentemente no es posible exceder.

Se ha incorporado, además, una tasa adicional para aquellas ventas de mercaderías que dan al adquirente un derecho a participar en rifas y sorteos de toda especie, o a obtener premios por actos de azar. Tales procedimientos no son a juicio del Poder Ejecutivo propios de la industria, ni del comercio; rozan las disposiciones legales represivas de los juegos de azar y constituyen una constante incitación al juego, tanto más perniciosa en ciertos casos, cuanto que operan sobre la mentalidad del público como principal estimulante en la elección de los artículos. En general, los premios son posibles a expensas de la calidad o de la cantidad de la mercadería vendida, pues la experiencia demuestra que no son substitutivos de la propaganda natural de la

industria para los productos que elabora y por lo tanto su costo incide necesariamente en los márgenes propios de la producción.

Por estas razones el Poder Ejecutivo entendiéndole que este proyecto comporta un paso más hacia el reajuste de nuestro régimen impositivo y por ello solicita y espera su aprobación.

Dios guarde a vuestra honorabilidad.

AGUSTÍN P. JUSTO.

Federico Pinedo.

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

Artículo 1º — Establécese un impuesto que se aplicará sobre las ventas de mercaderías, frutos y productos realizadas en todo el territorio de la Nación Argentina, en forma que incida sobre una sola de las etapas de que es objeto la negociación de cada mercadería.

Art. 2º — El gravamen que se aplicará sobre el precio neto de venta que resulte de la factura o documento equivalente, extendido por las personas obligadas a ingresar el impuesto, el que se considerará incluído en el valor de tales facturas o documentos, aun cuando no se lo consigne expresamente.

Art. 3º — A los efectos de la aplicación del impuesto, cuando las facturas o documentos a que se refiere el artículo anterior no expresen el valor normal de plaza, la dirección podrá estimarlo de oficio de conformidad con lo dispuesto por la ley 11.683.

Art. 4º — Son responsables directos del ingreso del impuesto:

- a) Los productores e industriales nacionales, por el impuesto correspondiente a la venta de mercaderías de su producción o manufactura;
- b) Los importadores, por el impuesto correspondiente a las ventas de mercaderías importadas por cuenta propia;
- c) Los exportadores, por el impuesto correspondiente a las mercaderías que salen del país por cuenta propia;
- d) Los importadores y los exportadores, por las mercaderías importadas o exportadas por cuenta de terceros.

A los efectos del inciso a), la dirección que-

da facultada para determinar aquellas actividades que deban considerarse como propias de la producción o actividad industrial.

Art. 5º — Cuando los importadores introduzcan al país mercaderías por cuenta de terceros, serán responsables del ingreso del impuesto desde el momento en que las mercaderías son retiradas de los depósitos de aduana. En estos casos y sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 9º de la ley 11.683, el impuesto se calculará sobre el valor incluídos derechos, más las comisiones y gastos facturados por el importador.

Art. 6º — Para determinar el monto del impuesto a pagar, se practicará una liquidación sobre la base del total de las ventas, efectuándose las siguientes deducciones:

- a) El importe de las ventas de mercaderías eximidas por la presente ley;
- b) El importe de las compras de mercaderías gravadas con el impuesto de esta ley, adquiridas en el mercado interno o importadas en las condiciones del artículo 5º para ser elaboradas o transformadas, agregadas o utilizadas para producir o industrializar mercaderías para la venta;
- c) El importe de las compras de mercaderías gravadas adquiridas en el mercado interno o importadas en las condiciones del artículo 5º para ser revendidas en el mismo estado en que se compran. En estos casos se sumará al precio de compra un coeficiente de aumento que fijará la dirección;
- d) El importe de los impuestos internos nacionales y provinciales abonados directamente por quienes practiquen la liquidación.

Art. 7º — El impuesto es adeudado desde el momento de la entrega de las mercaderías o acto equivalente y se percibirá sobre la base de la declaración jurada, en la forma y plazos que fijará la dirección. Cuando la mercadería es exportada en consignación, el impuesto es adeudado desde el momento del embarque y será liquidado en la forma que reglamentará el Poder Ejecutivo.

Art. 8º — Quedan exentas del impuesto:

- a) Las ventas en el mercado interno de las siguientes mercaderías de produc-

ción nacional: ganados; aves; huevos; carne fresca; frutos del país y subproductos ganaderos en tanto no hayan sufrido elaboración; cereales y oleaginosas; hortalizas; legumbres y frutas frescas; semillas y bulbos; harina de trigo y maíz; pan, galleta y productos similares de panadería; azúcar de caña y de remolacha; vinos genuinos, según la definición legal; productos frescos de la pesca; leche fresca o pasteurizada, crema, manteca y queso; productos de granja elaborados dentro de un régimen de trabajo familiar y, en general los productos de la ganadería y de la agricultura, en tanto no hayan sufrido elaboración o tratamientos no indispensables para su conservación en estado natural o acondicionamiento y tabacos, cigarros y cigarrillos;

- b) Las ventas efectuadas por las cooperativas de producción, constituidas de acuerdo a la ley 11.388 e inscriptas como tales en el Ministerio de Agricultura;
- c) Las ventas efectuadas por entidades de beneficio público que no persiguen fines luerativos, reconocidas como tales por la dirección;
- d) La venta de diarios, periódicos y revistas nacionales y extranjeras;
- e) La venta de acciones, títulos, divisas, valores, estampillas y billetes de lotería;
- f) El suministro de servicios públicos que sea materia de concesión oficial y cuyas tarifas estén aprobadas por los estados nacional o provinciales o por las municipalidades;
- g) Las ventas de los pequeños productores y artesanos en la forma que reglamentará el Poder Ejecutivo.

Art. 9º — Fijase en el 3 o/oo la tasa del impuesto sobre los productos o mercaderías vendidas o remitidas en consignación al exterior y en el 1 ½ % la tasa general del impuesto.

Art. 10. — Los responsables enumerados en el artículo 4º abonarán, además de la tasa establecida en el artículo anterior, una tasa adicional del 10 % sobre el importe de las mer-

caderías de su producción, elaboración o importación que se vendan en las siguientes condiciones:

- a) Con cupones que den al consumidor opción a participar en sorteos de cualquier especie o con marquillas, envases, cupones o cualquier otro aditamento, formando o no series, canjeables por dichos cupones;
- b) Con marquillas, envases, cupones o cualquier otro aditamento que den opción a premios de cualquier especie, salvo que el valor de las marquillas, envases, cupones, etcétera, sea igual para todas y cada una de las unidades de venta de las mercaderías, en forma que equivalga a una bonificación fija sobre el importe de cada unidad de venta.

Si las mercaderías vendidas en las condiciones a que se refieren los incisos a) y b) estuvieran comprendidas en las excepciones del artículo 8º, se abonará como impuesto sobre las mismas la tasa del 10 por ciento.

La tasa adicional establecida por el presente artículo comenzará a aplicarse sobre las ventas realizadas desde el 1º de Marzo de 1935.

Art. 11. — Dentro de los treinta días de la promulgación de la presente ley o antes de la iniciación de un negocio o industria cuyas ventas estén sujetas a este impuesto, los responsables enumerados en el artículo 4º estarán obligados a solicitar su inscripción en la Dirección General.

Quando la dirección lo estime conveniente, la inscripción podrá ser obligatoria para los re-vendedores, consignatarios o corredores, etcétera, los que quedarán sujetos a todas las obligaciones que establece la presente ley.

Art. 12. — La presente ley entrará en vigor el 1º de Enero de 1935. En tanto no se opongan a la presente ley son aplicables todas las disposiciones contenidas en la ley 11.683.

Art. 13. — El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley de acuerdo a lo establecido en el artículo 2º de la ley 11.683.

Art. 14. — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Federico Pinedo.

Sr. Presidente (Ferreira). — En consideración en general.

Sr. Bustillo. — Pido la palabra.

No es cómodo tener que informar un despacho sobre un tema que tanto ha preocupado a la opinión pública, la que ha escuchado preferentemente a los impugnadores. Espero poder demostrar que este gravamen es indispensable si se quiere cubrir el déficit que se produce con la unificación de los impuestos y con la supresión del impuesto a las transacciones.

En general, es fácil oponerse a la sanción de impuestos; los resisten sistemáticamente los presuntos contribuyentes; los esgrimen como arma política los opositores y hay algunos que sin ser ni contribuyentes ni opositores, por la naturaleza de sus afectividades, se suman a los impugnadores o hacen una oposición sorda y pasiva. La prensa tampoco ampara a los funcionarios o legisladores que después de un penoso trabajo llegan a la conclusión de que es necesario sancionar un impuesto de esta naturaleza. Tenemos de nuestro lado la necesidad fiscal y la certeza de que este gravamen no puede ser reemplazado con ventaja por ningún otro que consulte mejor la conveniencia del contribuyente y del fisco. Es indudable que en épocas normales puede ser reemplazado por un impuesto quizás más técnico; pero en épocas anormales es una necesidad para apuntalar presupuestos desvenecados por los arrastres de déficit. Pretender equilibrar presupuestos únicamente con economías, es no estar en la realidad. Se hicieron y se hacen economías en gran proporción pero se están ya resintiéndose los servicios públicos. El empleado parásito es una leyenda y algunos están muy recargados de trabajo y con sueldos disminuídos. Hay que estar en la Comisión de Presupuesto para oír el clamor de las necesidades sociales que no están contempladas en el presupuesto. Indiscutiblemente que la racionalización puede dar resultados en materia de economías, pero es necesario proceder con prudencia y no precipitadamente.

La Comisión de Racionalización ha

producido informes interesantes y corresponde al Poder Ejecutivo poner en ejecución esos dictámenes para realizar las economías.

Las economías que se pudieran hacer en esta forma no serían netas, porque indiscutiblemente harán falta para otras necesidades del presupuesto.

Sabemos que este año caduca el impuesto a los réditos y a las transacciones; y la concordancia parlamentaria tenía el propósito de dejar caducar el impuesto a las transacciones; pero desgraciadamente un estudio del presupuesto ha demostrado que eso es imposible. El Poder Ejecutivo, al remitir el mensaje de presupuesto a la Cámara, sostuvo la necesidad de mantener esos impuestos: el de los réditos y el de las transacciones, admitiendo que se podía substituir este último por otro impuesto que tuviera la misma naturaleza y carácter, pero que fueran de modalidades distintas. El proyecto de impuesto a las ventas preparado por el Poder Ejecutivo ha sido estudiado por la Comisión de Presupuesto, la que después de introducirle algunas modificaciones de detalle aconseja su aprobación, porque no implica para el consumo un aumento apreciable con respecto al impuesto a las transacciones y tiene sobre este impuesto grandes ventajas. Corresponde, sin embargo, anticipar que en el dictamen de la Comisión de Presupuesto ha influído, aparte de la consideración de orden fiscal, la de que el impuesto a las ventas es de alcance más limitado, de aplicación más sencilla y de más fácil traspaso al consumidor, a punto, que no obstante la semejanza de nombres y la misma identidad de la materia impositiva, pueden considerárseles como dos impuestos distintos aunque uno sea de técnica más perfecta que el otro.

El impuesto a las transacciones desde que fué implantado en el país ha dado un rendimiento término medio de \$1.000.000 de pesos por año calendario y en 1934, al 31 de Octubre, el rendimiento del impuesto ha sido de pesos 16.256.487, pudiendo anticiparse que la recaudación alcanzará a 18.000.000

de pesos, explicándose la disminución por el hecho de que se ha suspendido para el comercio minorista la obligación de ingresar el impuesto. Sobre esto se ha sancionado en el día de hoy el despacho que legaliza la situación que con su decreto había creado el Poder Ejecutivo.

Las dificultades que se han presentado para la aplicación del impuesto a las transacciones en cuanto él incide en el comercio minorista, son las que han originado la concepción del impuesto a las ventas. Se dice que el impuesto a las ventas es un disfraz disimulado del impuesto a las transacciones, que no corrige los inconvenientes de éste y que es más gravoso para el comercio y la industria.

Conviene establecer las dificultades fundamentales que existen entre uno y otro impuesto, diferencias que radican en el alcance más restringido de la materia impositiva cuando se trata de las ventas, y en el número de operaciones sobre las cuales recaerá el gravamen. El impuesto a las ventas incidirá solamente sobre la venta de mercaderías, quedando al margen de él todas las demás operaciones comerciales que no implican venta de mercadería. En el impuesto a las transacciones, en cambio, están sujetas a gravamen todas las operaciones comerciales, tengan o no como objeto la venta de mercaderías. También está comprendida dentro del impuesto a las transacciones la locación de servicios vinculados a la actividad comercial.

El gravamen a las transacciones debe ser abonado — para citar casos típicos — por todos los comerciantes que revenden mercaderías, por los que efectúan transportes que no están regidos por concesiones oficiales, por las empresas de construcción y pavimentación, por las oficinas de propaganda y también por los empresarios de espectáculos públicos. Todas las actividades enumeradas precedentemente y muchas otras escapan al alcance del impuesto a las ventas, el cual como he dicho, recaerá solamente sobre la venta de mercaderías.

Las disposiciones contenidas en el articulado del proyecto tienden a asegurar que el impuesto se mantenga dentro de las dos directivas que se anuncian en el artículo 1º: que el impuesto recaiga exclusivamente sobre la venta de mercaderías y que no incida más de una vez sobre cada mercadería. La venta de mercaderías es un acto concreto, preciso e indiscutible. La fijación de un impuesto sobre un acto perfectamente definido no ofrece dificultades de apreciación para el contribuyente ni para la repartición recaudadora, por cuanto la imposibilidad de una operación comercial queda vinculada a la condición material del traspaso de mercaderías.

Definida la materia del impuesto, se limita el campo del mismo a una sola de las transacciones de venta, generalmente la primera, de que es susceptible cada mercadería en el estado en que se vende. Esta disposición es la fundamental del régimen que se propicia, y a asegurar su cumplimiento tienden muchas de las disposiciones contenidas en los artículos siguientes.

La manera de hacer incidir el impuesto sobre la venta de mercaderías limita el número de los responsables, lo que facilita enormemente la percepción. Por el sistema del impuesto a las transacciones, según datos de la oficina de réditos y transacciones, el número de contribuyentes alcanzaba a 200.000, y por este sistema del impuesto a la primera venta, se los reduce a 18.000, lo cual tiene una gran importancia en el sentido de simplificar la percepción, además de la ventaja de reducir el número de responsables. Estos, generalmente, efectúan sus ventas al por mayor, circunstancia que les permite traspasar el impuesto sin mayores dificultades, ya sea consignándolo expresamente en las facturas de venta, o ya incluyéndolo en el precio de la mercadería.

A fin de evitar diferencias de criterio acerca del momento desde el cual se aplicará el impuesto, se ha introducido en la ley una disposición especial a este respecto: ese momento no puede

ser otro que el de la entrega de los productos o mercaderías u otros actos equivalentes, como ser la facturación, contrato de venta o contabilización.

Se ha contemplado, también, la situación de los industriales que tengan pendientes el cumplimiento de contratos concertados con fijación de precios antes de preverse la posibilidad de la implantación de este impuesto, porque siendo el momento en que ha de aplicarse el impuesto el de la entrega de la mercadería, es muy posible que algunos fabricantes la hayan elaborado para venderla sobre la base del impuesto a las transacciones cuya tasa es del 3 o/o en lugar del 2 % que se establece ahora. Para evitar este inconveniente se ha establecido en la ley un plazo de seis meses, que se considera suficiente para evitar situaciones que redundarían en perjuicio del comerciante que ha concertado operaciones con anterioridad al momento de conocerse este proyecto de ley.

Al establecer las exenciones, se ha seguido, en general, el criterio que informó el impuesto a las transacciones, precisando, sin embargo, el alcance de algunas exenciones que en la ley 11.680 eran demasiado latas. Así ocurre con la exención de los productos de la tierra, en que se había comprendido los productos minerales, y en este proyecto se establece que sólo se refiere a los productos de la agricultura.

Se han incorporado nuevas exenciones que alcanzan a los productos de las principales industrias y a aquellas que han sido afectadas por los impuestos internos que, al unificarlos, han elevado ya el gravamen a un límite que naturalmente, no conviene sobrepasar.

El mecanismo con que se aplicará el impuesto se ha concebido en forma tal, que evite al contribuyente formalidades especiales de contabilidad y complicaciones inútiles y costosas.

El impuesto sobre las ventas existe en Canadá, y es aplicado conforme al sistema de licencias otorgadas a los comerciantes inscriptos en un registro. Cuando entre ellos comercian, no pagan el impuesto; pero en cuanto un

comerciante licenciado vende el producto a uno que no tenga licencia, inmediatamente se aplica el impuesto. Este sistema es muy complicado. En este proyecto se ha adoptado otro sistema mucho más sencillo, mediante disposiciones y procedimientos simples en relación con la contabilidad usual de los comerciantes y con las que se puede establecer el impuesto sin causar perjuicios ni al fisco ni al contribuyente, mediante una compensación entre las compras que hace el comerciante que han sido sujetas ya a este gravamen, adquiridas en el mercado interno e importadas y las ventas que hace en total. Porque en este aspecto del asunto, la complicación proviene de lo siguiente: cuando se trata de importadores, de fabricantes nacionales o de exportadores, la liquidación del impuesto no ofrece absolutamente ninguna dificultad, porque el impuesto se paga sobre los productos vendidos; pero al mismo tiempo, un productor o un exportador, puede ser revendedor de mercaderías adquiridas que hayan pagado impuesto, como puede a su vez ser un industrial que utilice la materia prima que ha pagado y que, por consiguiente, tenga que discriminarla de las ventas que hace.

Para evitar esos inconvenientes, si se les obligara a pagar impuesto por la venta total, resultaría que una misma mercadería pagaría dos veces el impuesto, o si por el contrario se le obligara a hacer un distinguo o discriminación de las ventas que tienen que pagar impuesto y de las que no tienen que pagarlo, resultaría una contabilidad sumamente complicada.

Indiscutiblemente, este aspecto de la cuestión es el más delicado, y como yo no quiero abusar de la paciencia de la Cámara, me voy a permitir solicitar se me permita incluir en el Diario de Sesiones unos cuadros, que serán de suma utilidad para que cualquiera interpretación posterior que se haga de la ley no ofrezca ninguna dificultad. (1)

(1) Véase pág. 789.

El impuesto a las ventas y a las transacciones es, en realidad, un complemento del impuesto a los réditos. Con excepción de Estados Unidos e Inglaterra, todos los demás países casi sin excepción lo tienen. El comité financiero de la Liga de las Naciones lo aconsejó especialmente cuando el empréstito internacional que se hizo para salvar del caos a Austria y a Hungría. La guerra, con su secuela de deudas y la atención de nuevas actividades del Estado ha exigido nuevos recursos a los países. Estados Unidos e Inglaterra los han obtenido de preferencia aumentando sus tasas, en el *income tax*, pero ya también han empezado a sentir los inconvenientes de esos aumentos y desde hace unos años la preocupación de todos los ministros de Hacienda es reducirlas.

Los países latinos, acompañados por Canadá, han creado impuestos a las ventas o transacciones. La Argentina puede sin desmedro para ella compararse con estos países por la forma en que gravitan sus impuestos directos e indirectos.

La tasa que se ha proyectado para el impuesto a las ventas, para la tasa de exportación, es el mismo que rige en el impuesto a las transacciones, es decir, el 3 o/oo; y la otra tasa que se impone para el resto de las ventas es la del 2 %; tasa necesaria para obtener el rendimiento indispensable para reemplazar lo que se pierde con la unificación de los impuestos internos y al mismo tiempo para reemplazar lo que se pierde con la supresión del impuesto a las transacciones.

La tasa del 2 % no es exagerada. Aquí tengo una lista de los países que tienen impuesto a las ventas y a las transacciones. El único país que en realidad tiene un impuesto a las ventas, es Canadá y sus tasas han variado del 2 % al 6 %, siendo actualmente del 6 %. Francia tiene la tasa del 2 %, pero no hay que olvidar que en Francia rige el impuesto a las transacciones y el 2 % se aplica varias veces sobre la misma mercadería.

En los demás países que citaré, la tasa se encuentra en las mismas condi-

ciones que en Francia. El único país que tiene un sistema parecido al proyectado es Canadá.

En Francia, 2 %; Alemania, 2 %; Bélgica, 2 %; Italia, 1 a 1 ½ %; Checoslovaquia, 2 %; Polonia, 2 %; Austria, 2 %; Portugal, 1-2 %; Canadá, 4 por ciento.

Respecto a la importancia que este impuesto tiene en los presupuestos de los países, daré algunas cifras. En Francia, representan el 20 % de los recursos.

Sr. Ministro de Hacienda. — Ocho mil y pico de millones de francos.

Sr. Bustillo. — Es muy superior al impuesto a la renta.

En Alemania representa el 14 %; en Bélgica, el 21 %; en Italia, 5 a 8 %; Checoslovaquia, 17 %; Austria, 22 %. En la Argentina lo recaudado apenas representa del 3 al 4 % del presupuesto.

En Francia se dictó en Julio de 1934 una ley, reglamentada por decreto de estos días, mediante la cual se unifican algunas tasas. La tasa que se aplica, por ejemplo, a los artículos de almacén, comestibles, oscila alrededor del 6 %; en los productos de confitería, 5 a 8 %. Entiéndase bien que son tasas para el impuesto a las transacciones.

Sr. Ministro de Hacienda. — Y los artículos son estos: bizcochos, pan para régimen, pan de especias, 5,3 %; cacao, chocolate, 7 %; confitería, 7 %; achicoria, 8 %; artículos coloniales, 6,3 %. Se aplica a artículos indispensables, hasta a la carne.

Sr. Bustillo. — La carne, he visto que tiene 15 centésimos por kilo cuando es de Francia, y 25 cuando es importada. Así, que hasta en eso aprovechan para hacer tarifas diferenciales.

El impuesto a las ventas está vinculado al consumo. Parte de las sumas que habrá que entregar a las provincias tienen que provenir de este recurso y a su vez debe reemplazar, también, al impuesto a las transacciones.

El señor ministro de Hacienda, en un reportaje aparecido en «La Nación» de hoy, da algunas cifras que la Comisión de Presupuesto conocía y que son las que han determinado a despachar este impuesto, y hasta algunos señores

diputados que estaban dispuestos a no votarlo, se han rendido ante la evidencia de los hechos.

Por la unificación de los impuestos, las provincias llamadas consumidoras recibirán 41.000.000 y las llamadas productoras recibirán 31.000.000. En total, 72.000.000. Por la supresión de transacciones se pierden 18.000.000. Doy las cifras para llegar al déficit que hay que cubrir en parte con este impuesto a las ventas.

La participación que corresponde a las provincias por concepto de réditos es de 14.000.000 y por ventas — si se sanciona el impuesto — les corresponderá 5.000.000. En total, tenemos que las causas del déficit llegan a la suma de 110.000.000.

Veamos las causas de superávit. Por la recaudación de impuestos internos que hará la Nación se conseguirán 53.000.000; el producido del impuesto a las ventas, como ya lo indicó el señor ministro en el reportaje aludido, será de 30.000.000; y la modificación a los réditos que informó el señor diputado Martínez, importará 3.000.000 de pesos. En total se llega a 86.000.000, lo que da un déficit de treinta y tantos millones.

Este impuesto no es nuevo; viene a reemplazar al de las transacciones y cubrirá, como acabo de demostrarlo, el déficit que se produce por la unificación de los impuestos, unificación que significa para el comercio un alivio muy superior a lo que podría producir el gravamen en el caso de que incidiera sobre el comercio, como injustificadamente se afirma, cuando en realidad el propósito de la ley — nadie quiere disimularlo — es hacer deslizar el impuesto al consumidor.

Se ha dicho que el rendimiento calculado para el impuesto a las ventas podría obtenerse elevando la tasa del impuesto a los réditos. Pero convendría precisar en qué proporciones habría que elevar esa tasa y al mismo tiempo considerar los efectos que podrían producirse en su percepción. Se ha dicho también que la recaudación del impues-

to a los réditos es complicada, y evidentemente una elevación de la tasa la complicaría mucho más.

Para determinar la importancia de las modificaciones a introducir en las tasas básicas del impuesto a los réditos, a fin de que éste pueda producir los 30.000.000, es necesario discriminar si el aumento debe recaer sólo sobre la tercera categoría, que se refiere a las actividades comerciales e industriales, o si debe alcanzar a la segunda categoría, referente a las operaciones de orden mobiliario, o también a la primera categoría, sobre renta del suelo.

Los cálculos que pueden hacerse para distinguir el rendimiento de las diversas categorías son, en realidad, aproximativos, porque los únicos datos precisos que se puede obtener son los referentes a la cuarta categoría. Las cifras oficiales del impuesto a los réditos acusan para el actual ejercicio, hasta el 16 del corriente, una recaudación de 39.900.000 pesos, de los cuales corresponden 7.100.000 a la cuarta categoría, o sea el trabajo personal, y 32 millones, es decir 82 %, a la renta conjunta.

Dentro de la renta conjunta, el producido de la tercera categoría representa aproximadamente el 30 %, de modo que para una recaudación total de 60.000.000 calculada para 1935, la recaudación para la tercera categoría representa 17.000.000. Para que esa categoría rindiera los 30.000.000 más que se necesitan, según el cálculo, para reemplazar el impuesto a las ventas, habría que elevar la tasa del 5 al 13,50 %. Basta enunciar la magnitud del aumento para medir todas las consecuencias; se provocaría una resistencia que se traduciría en una evasión grande del impuesto.

Aplicándose igual criterio sobre la segunda y tercera categorías juntas, el impuesto actual del 5 % debería ser elevado a 9,50 %; y si el aumento se realizara sobre la renta de la primera, segunda y tercera categorías, sería necesario llevar al 7 % la tasa del 5 %, castigando a los propietarios de inmue-

bles grandes y pequeños, a los tenedores de títulos y a los comerciantes e industriales.

Aparte de estas cifras, sería un error modificar tasas a un impuesto que de acuerdo a la experiencia propia y universal, rendirá más con las tasas actuales a medida que penetre y se afirme la fiscalización.

No hay que tener un prejuicio tan grande contra los impuestos llamados, no muy científicamente, indirectos, entre los cuales no es muy seguro que pueda clasificarse el impuesto a las ventas. Para evitar estos gravámenes, se quiere elevar la tasa de réditos, sin meditar mucho las consecuencias. El impuesto a los réditos representa en Francia, después de 20 años de aplicación, sólo el 18 % de sus recursos. En Rusia, país de régimen socialista, que también lo implantó en 1923, representa 20 % de los recursos. Es cierto que en Estados Unidos e Inglaterra representa más de 50 % de sus entradas normales, pero no corresponde la comparación con esos países.

Sr. Pena.—¿Por qué la hace con Rusia, entonces?

Sr. Bustillo. — Para no hacer una excepción en la cita de todos los países. Tomo un país de régimen socialista y uno de régimen capitalista para señalar cómo en uno representa apenas el 20 % y en el otro representa más del 50 % de los recursos.

El sistema impositivo no se impone arbitrariamente; la tradición fiscal cuenta, y por más buena voluntad que pongamos no se cambiará en un día un régimen impositivo.

Inglaterra es un país eminentemente capitalista, que invierte capitales en el exterior, y como cobra el *income tax* en el domicilio, la riqueza del mundo entero contribuye a su recaudación. Es un hecho comprobado, también, que los países industriales — con estadísticas a la vista se puede ver — son los que obtienen mayor porción de su recaudación con los impuestos a la renta. No existen tampoco aquí las concentraciones de fortuna que existen en Estados Unidos. Allí el 90 % del *income tax*

proviene de la renta positiva. En donde no es así, para que el impuesto rinda es necesario recurrir a un campo más amplio. En Italia, por ejemplo, si se aplicara el sistema americano se dejaría de percibir más del 99 % de sus rentas.

El impuesto no es, sobre todo en casos de emergencia, un instrumento de reforma social. Es un recurso fiscal que hay que obtenerlo donde se halla y donde pueda pagarse sin mayores resistencias. Y si se eleva la tasa considerablemente, el resultado fiscal será desastroso, no sólo por las evasiones, sino por la pérdida que puede constatarse aritméticamente.

Pongamos, por ejemplo, una renta de 800.000 pesos. Al 20 % puede rendir como impuesto fiscal 160.000 pesos. Pero si esos 800.000 pesos se reparten entre dieciséis a cincuenta mil pesos cada una, con el 10 % de tasa, resultará que el fisco no percibirá más que la mitad, o sea 80.000 pesos. De manera, entonces, que una evasión de la mayor renta, provocada por la exigencia de la tasa sería de una repercusión mucho más grave que la evasión de una o dos o 15 rentas menores. La renta concentrada rinde fiscalmente no sólo por el mérito sino por la facilidad de percepción.

La real comisión inglesa que hizo un estudio sobre el sistema impositivo, decía en 1927 sobre el *income tax*, que cuando se trata de salarios y sueldos el efecto es insignificante, porque no lesiona mayormente el standard de vida ni destruye el espíritu de ahorro; pero tratándose de las actividades del comercio y de la industria, a medida que aumenta la tasa la desanimación crece. La extensión del daño fiscal depende de la eficiencia del individuo. Cuando el comercio carece de empuje o no tiene poder de crecimiento, el daño no tiene importancia. El comercio ineficiente no interesa al fisco, porque en él es tan perjudicial como cuando afecta al que sabe invertir con sagacidad y con espíritu de progreso.

En Estados Unidos sólo el 2 ½ % son contribuyentes, lo que quiere decir que

la mayor parte del gravamen lo soportan las clases con renta positiva. Pero si bien es cierto que los países como Inglaterra y Estados Unidos son los que tienen en sus recursos un porcentaje mayor de entradas provenientes de los impuestos a la renta, hay quienes atribuyen a esa circunstancia el hecho de que sean también los países que tienen una desocupación mayor. Por eso, la tendencia de esos países en los últimos años es disminuir esas tasas para evitar los inconvenientes que se señalan.

No quiero insistir mayormente sobre estos aspectos de la cuestión, y creo que podemos abordar el cálculo para llegar a determinar cómo se pueden obtener los 30.000.000 de pesos que se supone que este impuesto debe rendir.

De acuerdo con la ley, se pueden clasificar en tres grupos las fuentes que tienen que producir: las ventas de mercaderías efectuadas por importadores, las ventas de mercaderías efectuadas por productores o industriales nacionales, y las ventas de mercaderías efectuadas por exportadores.

Para calcular el monto de las ventas de los importadores, se deben tomar los valores reales del comercio de importación, cuya cifra, que conocemos, es la de 897.000.000. Pero como el impuesto se tiene que abonar sobre el precio de venta, será necesario agregar a esos valores el costo de los derechos de importación y el recargo por gastos de administración y la utilidad del importador. Los derechos de importación son conocidos, y se calculan en 257.000.000 de pesos. En cuanto a la cifra de gastos y utilidad de administración, mediante una *enquête*, se ha podido llegar a establecerla, de una manera más o menos aproximada, en un 15 por ciento.

En cambio, debe deducirse del valor real, un porcentaje estimado en un 40 por ciento, sobre el cual no incidirá el impuesto a las ventas, porque son mercaderías de importación que no son objeto de venta dentro del país. En esas condiciones están las importaciones efectuadas por las empresas de servicios públicos, los ferrocarriles, otras empresas de transporte y las de energía; las im-

portaciones de reparticiones nacionales y municipales; las importaciones de maquinarias y materias primas o semielaboradas, introducidas directamente por empresas industriales para la producción de mercaderías exentas, o para la preparación de mercaderías de exportación; además, las importaciones hechas directamente por particulares para su propio consumo; y, finalmente, pesos 18.000.000 equivalentes al 30 % sobre 62.000.000, que suman las importaciones de carbón mineral, cuya venta se exime del impuesto. El 70 % restante está incluido en las importaciones efectuadas por empresas de servicios públicos eximidas del impuesto.

Procediendo en esa forma, tomando la cifra de las importaciones y haciendo las discriminaciones a que me he referido, se llega a la suma de 893.000.000, y aplicándole el 2 %, resulta un producido de 17.940.000 pesos.

Las cifras de que me he valido son, más o menos, las mismas que las que ha publicado el señor ministro de Hacienda en «La Nación».

Sr. Pena. — Equivaldría lo mismo, por esos cálculos, decir que este impuesto a las ventas es un adicional de aduana de tanto por ciento. Sería exactamente lo mismo.

Sr. Bustillo. — No es un impuesto de aduana, porque este impuesto grava tanto a los productos importados como a los producidos en el país.

Sr. Pena. — En realidad, es un adicional de aduana.

Sr. Bustillo. — No, señor diputado; no es la misma cosa.

Sr. Pena. — Es cuestión de poner el porcentaje que corresponde, de acuerdo con el producido con respecto al valor de las importaciones gravadas.

Sr. Bustillo. — Las cifras que también se han publicado hoy en «La Nación» provienen de los datos obtenidos de las declaraciones juradas presentadas a la Dirección de los Impuestos a los Réditos y a las Transacciones. Por esas declaraciones juradas, la suma del movimiento comercial que se refiere a los industriales nacionales, es más o menos de 1.900.000.000 de pesos; pero

se ha tomado la cifra básica de 1.750 millones porque en ella están englobados los importes de ventas hechas por industriales y correspondientes a mercaderías adquiridas en plaza y vendidas en igual estado, lo que se estima en 150.000.000 de pesos.

De los 1.750.000.000 deberá deducirse el importe de las nuevas exenciones que son las siguientes: 130.000.000 correspondientes a la venta de azúcar; 80.000.000 correspondientes a la venta de vinos; 96.000.000 correspondientes a tabacos, cigarros y cigarrillos; 57.000.000 a productos de lechería; 40.000.000 a cervezas; 10.000.000 a alcohol de quemar; 20.000.000 a afrecho y afrechillo; 300.000.000, por lo menos, para transacciones sobre construcciones y pavimentación; lo que da un total de nuevas exenciones por 730.000.000, quedando una diferencia de 1.020.000.000.

No basta, sin embargo, aplicar las tasas a esta diferencia, por las modalidades con que se aplicará el impuesto a las ventas. Cada uno de los industriales al liquidar el impuesto debe deducir del monto de sus ventas el importe de la mercadería gravada y adquirida en el mercado interno para ser elaborada, transformada, agregada o utilizada en la producción de nuevas mercaderías. De modo, que de la cifra obtenida debe discriminarse el impuesto de ventas que corresponde a mercaderías en que se emplea materia prima exenta y la que corresponde a mercadería en cuya industrialización se utilizan materias primas gravadas o productos semi manufacturados adquiridos en el mercado interno. Sobre las primeras, es decir, sobre las en que se emplea materia prima exenta, se abonará el impuesto, con la sola deducción del impuesto sin bonificaciones, en tanto que los industriales que adquieran mercaderías ya gravadas pueden deducir del monto de ventas el importe de tales compras; por este motivo, el rendimiento del impuesto sobre las ventas de los industriales queda sensiblemente disminuído.

No es exagerado calcular en 380 mi-

llones el importe de la materia prima gravada, los productos semi elaborados e importados y de producción nacional que emplean los industriales a quienes alcanza el impuesto, cantidad que debe sumarse a las nuevas exenciones, a fin de establecer el rendimiento del gravamen sobre productos de la industria nacional, el cual en definitiva, será el siguiente: la venta de los productos industriales nacionales, según los datos de la oficina de transacciones son 1.950.000.000 de pesos. Hay que deducir las exenciones a que me he referido, es decir, 730.000.000 y hay que deducir a éstos, 380.000.000 por el importe de materia prima, importada o adquirida en el mercado interno, pero que ya ha satisfecho el impuesto. Todas estas discriminaciones suman 1.100.000.000.

Queda, entonces, un saldo para aplicar el 2 % de 640.000.000, lo que significa 12.800.000. Estamos muy lejos de los 57.000.000 que calculaba la Unión Industrial, como vamos a tener oportunidad de ver al hacer el análisis de la forma en que se han hecho las operaciones.

En el valor de la exportación no puede haber ninguna dificultad porque es una cifra conocida y la tasa es la misma que había antes en el impuesto a las transacciones, o sea el 3 por mil.

El valor de las importaciones ha sido calculado en 1.200.000.000 para 1934 y es el mismo que se mantiene para el cálculo de 1935. Rendirá, entonces, con la tasa de 3 por mil, 3.600.000.

Llegamos entonces, sumando los recursos provenientes del impuesto por las importaciones, del impuesto sobre la venta de las mercaderías nacionales y las exportadas, a la suma de 34.000.000 de pesos. Si de este importe se deduce un porcentaje del 15 % que debe calcularse como falla posible en los primeros momentos de la recaudación, llegaremos en esa forma a pesos 30.000.000. La cifra enunciada es la que más se acerca al posible rendimiento del impuesto, pues tiene una base seria, establecida sobre datos ofi-

ciales relativos al valor actual de la industria nacional en los rubros afectados por los impuestos a las transacciones.

El error fundamental de la Unión Industrial, cuyos cálculos, que se han hecho públicos en todos los diarios, estriba en que ha confundido el impuesto a las ventas con el impuesto a las transacciones. En el impuesto a las transacciones la tasa se repite sobre el monto neto de las operaciones, aun cuando muchas de éstas tengan por objeto siempre un mismo lote de mercaderías. En el impuesto a las ventas, el gravamen no puede incidir dos veces sobre la misma mercadería. La confusión en que ha incurrido la Unión Industrial se pone de manifiesto con el método empleado para calcular el rendimiento del impuesto. Ha sumado todas las ventas y ha tomado de esa suma el 2 %, sin tener presente que muchas industrias se complementan en etapas sucesivas y la mercadería que ha pagado el impuesto una vez no es gravada en las transacciones sucesivas. Tomemos un ejemplo: la industrialización de 10.000 kilogramos de lana — ejemplo que podría repetirse con la industria del calzado o cualquiera otra que elabore materia prima de esa naturaleza. — Aplicando el método utilizado por la Unión Industrial, se llega a este resultado: un lavadero de lanas adquiere 10.000 kilos de lana; en 7.000 pesos mediante su elaboración, llega a un valor de 7,086 en el momento de venderla. En este momento se aplica el impuesto del 2 %, o sea \$ 141,74. Este producto es vendido o adquirido por un taller de hilado, el que mediante su elaboración industrial llega a darle un valor en el momento de venderlo de 15.186 pesos. Se le aplica el impuesto del 2 % y le corresponde 303,74. Este producto, elaborado por una fábrica de hilados, se vende a una de tejidos que lo adquiere en ese valor de 15.186 y mediante la elaboración de su industria le da su valor de 19.304 pesos, sobre el cual el 2 % da \$ 386,08.

La Unión Industrial suma estos tres

impuestos y llega a establecer la cifra de 831 pesos que corresponde a las tres operaciones.

En realidad el cálculo habría que hacerlo así: Al lavadero de lanas le corresponde, después de elaborar el producto, 141 pesos de impuesto; el taller de hilados que le da un valor de 15.000 pesos debe descontar el valor de la materia que ha elaborado el lavadero de lanas y sobre lo que ya se ha satisfecho el impuesto. Entonces, en lugar de ser 303, como era el cálculo de la Unión Industrial Argentina, se reduce a 162. Lo mismo sucede con las fábricas de tejidos: hay que deducir del valor del producto el valor que tenía en el momento de salir de la fábrica de hilado; de tal manera que le corresponde un impuesto de 82 pesos. Sumados esos tres importes se obtiene 386 pesos, lo que acusa una diferencia de casi 500 pesos con el cálculo de la Unión Industrial. Esta última, para llegar a ese cálculo ha empleado también otro método que es el de la población. Partiendo del censo de 1914, que es muy atrasado, calcula la población industrial y establece un aumento de 73 % por el crecimiento vegetativo de la población, la que calcula en la actualidad en 12.000.000 de habitantes, de los cuales 2.156.000 dedicados a la industria, 1.137.000 a la agricultura, 603.000 al comercio, 150.000 a los transportes, y el resto hasta completar 5.000.000, a otras ocupaciones. Si estas cifras fuesen exactas se llegaría al caso paradójal de que la República Argentina tendría una población industrial tan grande como la de Alemania y superior a la de Estados Unidos, Italia, Canadá, Australia, Méjico y Sud Africa, ya que tendría un 17 % de población industrial, porcentaje que en Alemania es de un 20 % y en Estados Unidos de un 11 por ciento.

De manera, entonces, que los cálculos hechos por la Unión Industrial Argentina provienen de un error de método; en primer lugar, porque ha aplicado al sistema de las ventas el procedimiento

de las transacciones con una tasa del 2 % en lugar del 3 % que era la de transacciones.

La Unión Industrial ha afirmado que el impuesto a las ventas sobre el solo rubro de la producción nacional produciría al fisco un ingreso de 57.000.000, que sumado al producido de las importaciones y de las exportaciones daría un total de 84.000.000. Para ello la Unión Industrial llega por diversos procedimientos a calcular el valor de la producción nacional en 5.000.000 de pesos, que clasifica de la siguiente manera: 1.200 millones en producción agrícola ganadera, de exportación, 1.200 millones, de producción agrícola ganadera de consumo interno y una producción urbana 2.600 millones. Total 5.000 millones. La discriminación que hace solamente es de la exportación, los productos exentos señalados en el artículo 9º de la ley y los pequeños artesanos, 200 millones de pesos, llegando en esta forma a establecer la suma imponible de 2.865 millones.

En esa discriminación se ha olvidado incluir la producción agrícola ganadera de consumo interno que también está exenta por la ley, y tampoco se excluye lo que proviene de la luz y fuerza que según los datos de la oficina de transacciones llega a la suma de 280.000.000; tampoco discrimina la construcción y pavimentación, los editoriales de diarios y revistas que son 120.000.000, el carbón vegetal con 20.000.000 y la industria pesquera con 60.000.000. En total, haciendo la discriminación que corresponde, interpretando bien la ley, se llega con ese procedimiento a 839 millones, mientras que la Unión Industrial llega 2.865.000.000.

Ha quedado perfectamente bien demostrado el porqué de la diferencia.

Para poder apreciar, además, cómo se han equivocado esas entidades comerciales en la aplicación del sistema, basta tener presente que han firmado la solicitud que todos los señores diputados conocen, entidades que antes pagaban el impuesto a las transacciones y a las que ahora no les corresponde el impues-

to a las ventas. Tenemos, por ejemplo, las empresas de luz eléctrica, la Bolsa de Ganado, el Centro de la Industria Lechera, el Centro de la Navegación Transatlántica, la Cámara Gremial de Molineros, Cámara de Comisionistas Oficiales de Bolsa, Asociación de Compañías de Seguros, el Mercado de Títulos Inmobiliarios, Centro de Patrones Panaderos de Buenos Aires, a todos los cuales no les corresponde el impuesto a la venta. Con el mejor propósito, pero sin conocer bien los alcances de la ley, esas entidades se han lanzado a una campaña y han hecho unos cálculos que bien examinados establecen que no les corresponde de ninguna manera el gravamen y no pueden dar motivo a los juicios que sobre el impuesto han emitido.

Sr. Bogliolo. — Se curaron en salud.

Sr. Bustillo. — Así es.

Llego ahora al final de mi larga exposición. Creo haber dado las razones y fundamentos que aconsejan la sanción de este despacho. Me parece también que he desvirtuado las críticas que públicamente se han formulado contra el mismo.

He explicado, para que no haya duda en la aplicación de la ley, el mecanismo del sistema. En estas condiciones considero que no es prudente oponerse por razones artificiosas o interesadas, a medidas que tienen antecedentes universales, que han sido estudiadas teniendo en cuenta todos los factores y pesado todas las consecuencias, con la absorbente preocupación de atender las necesidades del erario, sin llevar una lesión a los muy respetables intereses del comercio y de la industria.

Es, pues, un deber de todos no ponerse en la corriente de los impulsos sino explicar a nuestros representados la necesidad y las ventajas de medidas cuyas consecuencias no son siempre inmediatas. Al proceder así, defenderemos nuestras instituciones del ataque de aquellos que sostienen que son inadecuados para resolver los problemas económicos que tanto nos agobian y que estamos paulatinamente dominando. (*¡Muy bien! ¡Muy bien! Aplausos!*)

Sr. Pena. — Pido la palabra.

He escuchado el informe del señor diputado por la provincia de Buenos Aires y observo que se ha detenido a analizar objeciones al impuesto y a sus consecuencias, hechas por la Unión Industrial Argentina, pero el señor diputado, tan prolijo, no ha llevado el análisis a las últimas consecuencias, como sería saber dónde va a ir a buscar los 30.000.000.

Sr. Bustillo. — Como los señores diputados socialistas han atacado el despacho, me reservo para después contestar las observaciones que en ese orden de ideas expongan y tengo la absoluta seguridad de que en esa oportunidad llevaré el análisis a las últimas consecuencias, como desea el señor diputado.

Sr. Presidente (Ferreira). — ¿El señor diputado por la Capital ha solicitado la palabra?

Sr. Pena. — Yo hacía una observación al señor diputado, tan minucioso en su informe, que había llevado su análisis hasta cierto punto, pero no a las consecuencias de saber de dónde deben salir los 30.000.000 de pesos.

Sr. Bustillo. — En la exposición que he hecho queda bastante claramente establecido que este impuesto en realidad lo va a pagar el consumidor, pero no el consumidor que le interesa al señor diputado, porque las exenciones de la ley se refieren justamente al gran consumidor. En realidad, la que al final va a pagar el impuesto, es la clase a la cual los señores diputados parecen no tenerle muchas simpatías.

Sr. Presidente (Ferreira). — No habiendo número en el recinto ni en la casa, queda levantada la sesión.

—Era la hora 20 y 12 minutos.

INSERCIÓN SOLICITADA POR EL SEÑOR DIPUTADO PUEYRREDON

Buenos Aires, Noviembre 27 de 1934.

Señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.

Señor presidente:

Los subscriptos, miembros del Comité de Cámaras de Comercio extranjeras en la República Argentina, constituido por las cámaras de Comercio: «Alemana», «Belga», «Británica», «Española», «de Estados Unidos de Norte América», «Francesa», «Holandesa» e «Italiana», respetuosamente exponemos:

La Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Honorable Cámara de Diputados ha despachado favorablemente un proyecto del Poder Ejecutivo respecto de una tasa adicional del 5 % sobre las utilidades e intereses de obligaciones de sociedades anónimas, cuyo articulado nos sugiere las observaciones que ponemos en conocimiento de vuestra honorabilidad, solicitando sean tenidas en cuenta al considerar dicho despacho.

Con el propósito manifestado de evitar la evasión de la tasa adicional progresiva que el artículo 30, inciso b) de la ley 11.682 establece exclusivamente para las personas de existencia visible, se ha proyectado una tasa adicional del 5 % que las sociedades por acciones deben retener y pagar al distribuir sus utilidades como dividendo o al pagar intereses de obligaciones cuando estos títulos fuesen al portador y el accionista o poseedor de las obligaciones no estuviese inscripto en un registro especial que deberán llevar dichas sociedades con las formalidades y requisitos que se determinarán en la reglamentación que se dicte.

Esa tasa adicional del 5 % no grava los beneficios de las sociedades anónimas, sino únicamente la parte de los mismos que se distribuye como dividendo o intereses a los tenedores de acciones o de obligaciones al portador que omitan inscribirse en el referido registro especial.

El despacho de la Comisión de Presupuesto y Hacienda también establece que «igual obligación de retener e ingresar la tasa adicional del 5 % tienen las sucursales de so-

ciudades por acciones que distribuyen sus beneficios en el extranjero por el total transferido o que se acredite como utilidad a casa matriz.»

Pero es el caso, Honorable Cámara, que los beneficios obtenidos en la República por las entidades civiles y comerciales que no distribuyan sus utilidades en el país, sean o no constituidas en el extranjero, sólo están sujetos a gravamen de la tasa básica del 5 % sobre el monto neto de los mismos (artículo 17, segundo apartado; artículo 30, inciso a), de la ley 11.682).

Esos beneficios no deben pagar la tasa adicional progresiva del artículo 30, inciso b), porque esta tasa adicional ha sido establecida únicamente para las personas de existencia visible.

Si ello es incuestionable, no lo es menos que no puede aplicarse a las sociedades anónimas que no reparten sus beneficios dentro del país la retención proyectada para evitar la evasión de la tasa adicional progresiva del artículo 30, inciso b) porque tales sociedades no están obligadas a efectuar su pago.

El artículo 17, segundo y tercer apartados, de la ley 11.682, equipara los beneficios obtenidos en la República por las entidades civiles y comerciales que no distribuyen sus utilidades en el país a los beneficios de las entidades que los reparten en el país por la parte que no se distribuya a los accionistas, directores o síndicos.

El despacho de la Comisión de Presupuesto y Hacienda altera esa igualdad establecida en el artículo 17 de la ley 11.682, entre las sociedades que reparten sus beneficios en el país y las que los distribuyen en el extranjero.

En efecto: la Comisión de Presupuesto y Hacienda, comprendiendo que dentro de la economía de la ley 11.682 no era posible establecer una retención adicional respecto de las utilidades de las entidades mencionadas en el apartado tercero del citado artículo 17, por la parte que no se distribuye, por cuanto el respectivo adicional sólo lo pagan las personas visibles que se distribuyen como dividendos o intereses de obligaciones.

Es decir, que el adicional proyectado no se aplica a las utilidades no repartidas a los accionistas o poseedores de obligaciones.

En cambio, el despacho ha alterado la economía de la ley 11.682, quebrantando la igualdad establecida en la misma, al proyectar la obligación de las sucursales de sociedades por acciones que distribuyen sus beneficios en el extranjero, de retener y pagar la tasa adicional del 5 % respecto del total de los importes transferidos o que se acrediten como utilidad a casa matriz.

Ese criterio diferencial es aún más injustificado si se tiene presente que los beneficios obtenidos en el país por las sucursales no siempre son repartidos y a veces son absorbidos por las pérdidas experimentadas como consecuencia de las operaciones de las demás sucursales y casa matriz.

La igualdad ante la ley es un principio elevado a la categoría de garantía constitucional (artículos 15 y 20 de la Constitución nacional) y ha sido reconocida en los tratados celebrados con diversos países extranjeros que son ley suprema para la Nación (artículo 31 de la Constitución nacional).

En el tratado de amistad, comercio y navegación celebrado con Estados Unidos de América el 27 de Julio de 1853 se ha establecido en el artículo 9º que los «ciudadanos de las partes contratantes gozarán recíprocamente de los mismos privilegios, prerrogativas y derechos que los ciudadanos nacionales y que no se les gravará con impuestos o derechos mayores que aquellos que pagan o pagaren los ciudadanos nacionales».

Análoga disposición contienen los tratados celebrados con Gran Bretaña el 2 de Febrero de 1825; con Prusia y el Zollverein el 19 de Septiembre de 1857 y con España el 21 de Septiembre de 1863, la cual rige igualmente las relaciones del país con Francia e Italia en virtud del tratamiento de nación más favorecida que contienen los tratados de 10 de Julio de 1853 y 1º de Junio de 1894, respectivamente.

A las precedentes razones de carácter estrictamente legal pueden agregarse otras fundadas en la equidad y en los bien entendidos intereses de la economía nacional.

Las sociedades extranjeras, al radicar capitales (en el país mediante el establecimiento de sucursales), han contribuido eficazmente al desarrollo de sus riquezas naturales y de sus fuerzas económicas. La implantación de un impuesto diferencial colocaría a esas sociedades extranjeras en una situación desfavorable respecto de las sociedades nacionales y ahuyentaría los capitales que del extranjero han afluído y afluyen reclamados por las necesidades de nuestro comercio e industrias y estimulados por las garantías que se les ha ofrecido hasta el presente al igualarlos en sus derechos al argentino. El impuesto proyectado constituiría una rectificación de la política económica seguida por el país, en un momento en que se siente más intensamente la necesidad de atraer y arraigar nuevos capitales.

Los escasísimos dividendos que distribuyen esas compañías extranjeras a causa de la honda crisis que aflige la economía nacional y mundial hacen aún más onerosa la proyectada tasa adicional que vendría a gravar utilidades obtenidas en el país, que pueden ser insuficientes para cubrir las pérdidas de la casa matriz y, ¿por qué no decirlo?, el sensible quebranto que han sufrido los capitales importados a causa del régimen de los cambios y de la desvalorización de nuestra moneda nacional.

Esperando que las razones expuestas han de merecer especial atención de la Honorable Cámara de Diputados, en homenaje a los intereses generales y vitales de la Nación, saludamos al señor presidente con nuestra mayor consideración.

Comité de Cámaras de Comercio Extranjeras en la República Argentina: *J. Comín*, presidente. — *G. Raiffaud*, secretario. Cámara de Comercio Alemana: *C. Schimits*, presidente. Cámara de Comercio Belga: *G. Bastin*, presidente. Cámara de Comercio Británica: *C. B. Don Fox*, vicepresidente. Cámara de Comercio Española: *A. Polledo*, presidente. Cámara de Comercio de los Estados Unidos de Norte América: *C. C. Batchelder*, presidente. Cámara de Comercio Francesa: *G. E. Artaux*, presidente. Cámara de Comercio Italiana: *J. Comín*, presidente. Cámara de Comercio Holandesa: *J. Ph. van Gostham*, presidente.

INSECCION SOLICITADA POR EL SEÑOR DIPUTADO BUSTILLO

Declaración jurada y liquidación del impuesto

De un fabricante de calzado que ha hecho las siguientes operaciones:

	\$ m/n.
<i>Compras:</i> Cueros, clavos, hilos, tinta, cordones, goma, suela, etcétera	408.000.—
Calzado de tipos que no fabrica	248.000.—
y que revende con recargo del 10 %	24.870.—
<i>Ventas:</i> Total de ventas brutas	1.152.300.—
<i>Bonificación y descuentos acordados</i>	46.092.—
Devoluciones de mercaderías	80.661.—

RUBRO I.—*Determinación de las ventas gravadas:*

a) Monto bruto de ventas, según libros	1.152.300.—
b) Monto bruto de ventas exentas	—
c) Monto bruto de ventas gravadas	1.152.300.—

RUBRO II.—*Deducciones permitidas:*

a) Importe de los descuentos, bonificaciones y devoluciones	126.753.—	
b) Importe de las compras de mercaderías gravadas adquiridas en el mercado interno	408.000.—	
c) Importe de las compras de mercaderías gravadas adquiridas en el mercado interno para ser revendidas en el mismo estado	248.700.—	
Coficiente a sumar al importe de este inciso (10 %)	24.870.—	274.570.—
d) Importe de los impuestos internos abonados	—	
Total del Rubro II (Para deducir del Rubro I, inciso c)	808.320.—	808.320.—

RUBRO III.— <i>Monto de las ventas sobre las cuales se debe ingresar el impuesto</i>	343.980.—
--	-----------

Impuesto 2 % sobre \$ m/n. 343.980.— . . . \$ 6.879,60, que se abona mediante cheque contra Banco, etcétera.

EJEMPLO

Forma en que recae el impuesto de un proceso de industrialización en el que intervienen varios proveedores.

Un fabricante de agua colonia vende 100 litros de productos de su fabricación a \$ 4,20 el litro, incluido \$ 1.— por litro en concepto de impuestos internos, importando la venta \$ m/n. 420.

Ese fabricante ha comprado para producir el producto vendido las siguientes mercaderías:

60 litros de alcohol a \$ 11.—, incluido \$ 90.— en concepto de impuestos internos;

Drogas y esencias por \$ 1,70;

100 envases a \$ 0,18 c/u. o sea \$ m/n. 18.

El impuesto será liquidado por cada uno de esos industriales en la forma siguiente:

I. — *Productor de alcohol:*

	\$ m/n.
Importe de la mercadería vendida	111.—
Impuestos internos a deducir	90.—
Monto imponible	21.—

a) Impuesto 2 % sobre \$ 21 0,42

II. — *Importador de drogas:*

Importe de la mercadería vendida	1,70
--	------

b) Impuesto 2 % sobre \$ 1,70 0,034

III. — *Fabricante de envases:*

	\$ m/n.
Importe de mercadería vendida	18.—
c) Impuesto 2 % sobre \$ 18	0,36

IV. — *Fabricante de perfumes:*

Importe de la mercadería vendida	420.—
--	-------

A deducir:

	\$ m/n.
Por impuestos internos	100.—
„ alcohol comprado	111.—
„ drogas compradas	1,70
„ envases comprados	18.—
	230,70

Monto imponible 189,30

d) Impuesto 2 % sobre pesos 189,30 3,78

De modo que, cuando los 100 litros de agua colonia llegan al mercado, se ha abonado, en concepto de impuesto a las ventas, la suma de \$ 4,60 (cuatro pesos con sesenta centavos), descompuesta en los siguientes parciales:

	\$ m/n.
a) Abonado por el fabricante de alcohol	0,42
b) Abonado por el importador de drogas	0,03
c) Abonado por el fabricante de envases	0,36
d) Abonado por el fabricante de perfumes	3,78

Total 4,60